

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL.

Magistrado ponente: Dr. Alberto Ospina Botero.

Bogotá, dieciseis de marzo de mil novecientos setenta y ocho.-

Procede la Corte a decidir el recurso de casación -
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 20 de octubre de
1976, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el proceso ordinario de Luis Carlos Palacios y Odilia Morales de Palacios con-
tra el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria "Incora".

Antecedentes

I - Mediante libelo de 25 de mayo de 1974, los re-
feridos demandantes citaron a proceso ordinario reivindicatorio al Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, en procura de que se hiciesen los siguien-
tes pronunciamientos :

a) Que se condene a la entidad demandada a restituir
a los demandantes, en el término legal o en el que señale el Juez, el predio
rural denominado "El Arroz", situado en Sumapaz, Municipio de Usme, alindado
en la forma que describe el hecho primero del libelo.

b) En subsidio y "por haberse convertido la cosa rei-
vindicada en bien de utilidad pública o interés social", se condene al deman-
dado a pagar a los actores el valor del inmueble mencionado en la cuantía que
se determine por peritos en este proceso, "o en el especial de ejecución, más
los intereses legales desde el día en que se realizó la ocupación por el

INCORA hasta el día en que se efectúe el pago de la misma, y en la cual los actores deben solemnizarle la venta respectiva a la demandada".

c) Que se condene a la parte opositora a pagarle a los actores los frutos naturales o civiles y no solamente los percibidos sino los que éstos hubieran podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo el predio en su poder.

d) Que se condene a la parte demandada al pago de las costas.

II - Como presupuestos de hecho que sirven de soporte a la pretensión, refiere los que a continuación se compendian :

a) Que en el año de 1968, ante el Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, los actores promovieron un proceso de pertenencia, que se extravió, lo cual dió lugar a la iniciación de un segundo proceso de la misma especie, pues al efecto presentaron demanda el 23 de octubre de 1968 ante el Juzgado 9º Civil del Circuito, habiendo terminado con sentencia de 27 de octubre de 1970, favorable a las pretensiones de los demandantes y desfavorable, por ende, al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, quien a la sazón formuló oposición alegando que el bien raíz era baldío.

b) Que entre tanto se sustanciaba este último litigio, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, concretamente en el mes de noviembre de 1969, adjudicó a Abraham Moya, Jorge Emiro Castellanos, Waldina Bohórquez y Fabio María Castellanos, algunas porciones de terreno, desmembrándolas del inmueble materia de este proceso; y en noviembre de 1970 adjudicó otra porción a Luis Gerardo González.

c) Que como consecuencia de no haberse ordenado en la sentencia dictada en el proceso de pertenencia la restitución del bien a los actores, y no colaborar en ello la entidad demandada, es la razón del presente litigio reivindicatorio.

d) Finalmente y respecto de la súplica subsidiaria refiere que al haber sido destinado el predio a una "obra de interés social y de utilidad pública", y "como ya no es posible la restitución de la cosa misma, la acción se cumple y satisface a favor de los demandantes y en contra del -

"INCORA" por medio del pago del bien ocupado", tal como lo dispone el artículo 951 del C. Civil.

III - La parte demandada consignó su respuesta en escrito de 3 de agosto de 1974, en el sentido de aceptar unos hechos y negar los otros, para culminar con oposición a lo pedido, pues afirma que la acción incoada no procede ya que éste -el Incora- no es ni ha sido en momento alguno poseedor del bien.

IV - Impulsado el proceso, la primera instancia terminó con sentencia de 10 de diciembre de 1975, desfavorable a los actores, por lo tanto se negaron las súplicas de la demanda, decisión contra la cual los actores interpusieron el recurso de apelación, habiendo culminado la segunda instancia con sentencia de 20 de octubre de 1976, confirmatoria de la del a quo, lo que dio lugar a que la misma parte interpusiera el recurso extraordinario de casación, que la Corte procede a resolver por hallarse tramitado.

La sentencia del Tribunal

Referidos por el sentenciador ad-quam los antecedentes del litigio, entra enseguida, con fundamento en los artículos 946 y 952 del C. Civil, a enunciar los cuatro presupuestos de la acción reivindicatoria y, al encontrar y dar por establecido el atinente al señorío por parte de los actores respecto del bien raíz que se persegue en la litis, dice que no ocurre lo propio en relación a la posesión del bien por parte de la entidad demandada, y en el auto hace las siguientes consideraciones :

- a) Que el artículo 952 del C. Civil preceptúa que la acción reivindicatoria debe dirigirse contra el actual poseedor.
- b) Que en el proceso no solamente se advierte la carencia de toda prueba que señale a la parte demandada como poseedora actual, o que alguna vez lo ha sido, sino que varios medios de convicción pedidos por la misma parte demandante están afirmando lo contrario, como ocurre con la inspección judicial, el dictámen de peritos y las resoluciones de adjudicación, que señalan como poseedores a otras personas, o sea, a Luis Gerardo Morales, Fabio Castellanos, Luis Eduardo González y Jorge Emiro Castellanos.

Luego dice el Tribunal que tampoco se está en ninguno de los casos excepcionales contemplados en los artículos 954, 955 y 957 del -

Código Civil.

Finalmente afirma el sentenciador de segundo grado que "por las mismas razones expuestas tampoco podría prosperar la poco inteligible petición subsidiaria de la demanda, la que no encuentra menor correspondencia probatoria en el proceso, en el sentido de que 'la cosa reivindicada' 'se convirtió en bien de utilidad pública o interés social', razón por la cual el INCORA tendría que pagar su precio a los actores y éstos otorgar el título respectivo".

La demanda de casación

Con fundamento en la causal primera de casación, el recurrente formula un único cargo contra la sentencia del Tribunal, mediante el cual denuncia "violación indirecta de los arts. 762 y 782 del C.C., por falta de aplicación del art. 962 del C.C., a consecuencia de error de hecho en la apreciación errónea de los medios probatorios de inspección judicial y dictamen pericial y por haber ignorado, desconocido o tenido por inexistentes los medios probatorios aportados en legal forma, tales como la sentencia proferida por el Juzgado 9º Civil del Circuito de Bogotá en 27 de octubre de 1970 la cual tiene la calidad de cosa juzgada; la certificación expedida por la entidad demandada en Junio 1º de 1973; las resoluciones Nos. 04953, de septiembre 28 de 1971, 07182 de Noviembre 5 de 1970, 18054 de Nov. 28 de 1969, 18066 de Nov. 28 de 1969; 17785 de Nov. 21 de 1969. 17233 de Nov. 10 de 1969, 19673-69, 2238 de 1970, 2233 de 1970, 7195 de 1970, todas emanadas de la misma entidad demandada".

En el desenvolvimiento del cargo dice el censor que el "Tribunal al advertir 'la carencia de toda prueba que indique que la entidad demandada es la actual poseedora del inmueble o que alguna vez lo ha sido', - yerre puesto que para tomar y tener como cierta aquella afirmación se remite a la Diligencia de Inspección Judicial, al dictamen pericial y a algunas resoluciones de adjudicación, sin indicar, siquiera someramente, de qué parte de aquellas piezas infiere, deduce o sustenta su conclusión, ni menos aún, las razones jurídicas valederas o imperativas al caso sub-judice".

Enseguida afirma el casacionista que basta acudir a las mismas pruebas para observar que en ellas se exterioriza que en el inmueble, -

En materia del litigio, se encontró a Teodoro Penagos, Vicente Díaz, Fabio Castellanos, Luis Benarro González, Jorge Emiro Castellanos y Pablo Penagos, quienes manifestaron que se hallaban allí "por cuenta del Incore".

Más adelante sostiene el recurrente que el yerro resulta ser más protuberante, cuando las mencionadas pruebas de Inspección Judicial y pericial les concede "un valor probatorio, un contenido, una versión, un hecho que no contiene, que no reza y ni siquiera de ellos se deducen, en lo que consiste el error que se endilga al fallador de instancia quien tomó un juicio falso por tener en su estado subjetivo solo la ilusión de verdad".

A continuación el censor cita varias doctrinas de la Corte sobre el yerro fáctico, de todo lo cual infiere y afirma que el Tribunal confundió la posesión con la tenencia, figuras jurídicas inconfundibles.

Se ocupa el recurrente luego del quebranto cometido por el Tribunal del inciso 2º del art. 782 y en el punto, dice: "Si bien se ha demostrado en este proceso que el inmueble objeto de reivindicación, al momento de practicarse la diligencia de Inspección Judicial y de producirse el dictamen pericial, se encontraba ocupado o en posesión de las personas que en cada una de aquellas probanzas se enumeran, sin ser las mismas mandatarios o representantes legales de la demandada, no es menos cierto que esas mismas personas ocupaban o poseían el mismo inmueble EN NOMBRE, por mandato Y AUTORIZACIÓN EXPRESA, SI, de la entidad demandada quien, a su vez, conoció con anticipación y asintió en tal posesión, todo lo cual se encuentra debidamente acreditado en autos, a través de medios probatorios idóneos y suficientes, unos de los cuales fueron desfigurados por el Tribunal, al hacerlos decir lo que en realidad no expresan, otros fueron desconocidos, olvidados y no valorados por el sentenciador".

Una vez que el censor transcribe los arts. 2 de la ley 200 de 1936 y 3 de la ley 135 de 1961, insiste en que el ad-quem cometió error de hecho en la apreciación de las pruebas de inspección judicial, pericial y un memorial dirigido por los ocupantes a un Inspector de Policía. Y añade que el presupuesto de la posesión por parte de la entidad demandada se encuentra plenamente establecido en el proceso, así: "a) En diligencia de ins

pección judicial: 'dentro del inmueble se encontraron los señores ... quienes enterados del motivo de la diligencia manifestaron que se hallaban en estos parajes por cuenta del INCORA'; b)= Dictamen pericial: 'se constató que dentro del inmueble se encontraron los señores ... quienes manifestaron que se hallaban dentro del predio por cuenta del INCORA', pruebas estas de las cuales el Tribunal deduce conclusiones no contenidas ni deducidas de tales medios; c)= A través de las resoluciones de adjudicación que atrás se determinan, en las cuales el INCORA solo invoca y ejerce sus funciones administradoras de tierras baldías; d)= La sentencia a través de la cual el Juzgado 9º Civil del Circuito de Bogotá D.E. en octubre 27 de 1.970 desató la litis a que allí se alude dentro de la cual fue parte el INCORA como opositor y vencido; e)= La certificación expresa que la misma entidad demandada expide con fecha junio 1º de 1.973; f)= La totalidad de los documentos que obran entre los folios 24 á 54 y 61 á 70 del cuaderno principal, a través de los cuales los demandantes ponen en conocimiento de la demandada, no solamente los derechos y la titulación que los acredita, sino la posesión y procedimiento arbitrario e inequitativo por parte de la demandada. Pruebas éstas últimas no tenidas en cuenta por el Tribunal y que demuestran en forma plena el conocimiento y aceptación que el INCORA tenía e hizo respecto de la posesión de las personas que en su nombre lo hacían sobre el predio que en este proceso se individualiza. De manera que si el ad-quem hubiera otorgado y deducido los hechos y el valor que dentro de una sana hermenéutica arrojan las pruebas aportadas de inspección judicial y dictamen pericial, por una parte, y por la otra, si hubiera examinado, siquiera someramente, las pruebas diferentes en legal forma aportadas, no desvirtuadas ni maltrechas dentro de la actuación procesal, fácilmente hubiera concluido en el extremo opuesto y favorecido las pretensiones del libelo por la imperatividad del art. 962 del C.C.".

Considera la Corte :

1.- De manera reiterada y uniforme tiene dicho la Corte que todo cargo que se formule en casación con respaldo en la causal primera, ha de basarse inexcusablemente en la violación de la ley sustancial, bien

por interpretación errónea, por aplicación indebida o por falta de aplicación, la vía elegida es la directa, o por inadecuada aplicación o inaplicación, si la vía escogida es la indirecta. Por consiguiente, si el censor omite señalar el tipo de la violación incurre en una grave deficiencia que no puede suplir la falta ante el carácter dispositivo y formalista del recurso extraordinario.

2.- De otra parte, cuando la impugnación consiste en que el Tribunal ha dejado de aplicar a la situación sub-lite el régimen legal - que es pertinente, ha sostenido igualmente la doctrina de la Corte que si el régimen no está contenido en uno o varios preceptos sino en muchos más cuya conjunción constituya la proposición jurídica completa, le impone al recurrente la necesidad de formular la acusación con el señalamiento de todas aquellas normas sustanciales que estructuran la mencionada proposición, pues de no hacerlo así, la acusación queda trunca y, por ende, se hace inane.

Sobre el particular, tiene sentado la Corte: "Cuando el derecho tutelado por normas sustanciales deriva no de una sola de ellas sino de la combinación de varias, es decir, cuando únicamente a base de la conjunción de éstas se estructura una proposición jurídica completa, la acusación por la cual se reclama el primer recurso exige necesariamente que el recurrente indique como infringidas esas normas" (CXXIX, 66).

3.- En el cargo formulado acontece que el censor, si bien indica el sentido del quebranto del art. 962 del C. Civil, omite señalarlo respecto de los artículos 762 y 782 ibidem. Por otra parte, el artículo 762 no es una norma sustancial, pues el primer inciso se limita a definir la posesión, y el segundo a consagrar la presunción de señorío, pero sin crear, modificar o extinguir derechos ni obligaciones. Por añadidura se tiene que si el sentenciador, según se dejó visto, desestimó la pretensión de reivindicación por no encontrar demostrados los presupuestos de la misma, en particular, el establecimiento de la posesión material del predio por parte de la entidad demandada (artículos 945 y 952 del C.C.), ni tampoco se daba ninguno de los casos contemplados en los artículos 954, 955 y 957 del C. Civil, el recurrente ha debido dirigir su ataque por inaplicación de las normas reguladoras del derecho alegado y reconocido por el sentenciador, vale decir, las atinentes a la acción reivindicatoria. Como no procedió así, el cargo aparece incompleto por falta de propo-

sición jurídica, pues se insiste en que cuando la situación jurídica definida por la sentencia depende de varios preceptos que se combinan entre sí, la acusación por ser cabal, tiene que versar sobre todas esas normas, so pena de fracasar en su intento de quebrar la sentencia, la cual sigue amparada por la presunción de acierto.

4.- Finalmente, del extracto que se hizo de la sentencia recurrida aparece que el sentenciador adujo como fundamento de su decisión desestimatoria dos razones fundamentales, a saber: -a) que no estaba acreditada la posesión respecto de la parte demandada; y, b) que no teniendo la demandada la cosa en su poder, tampoco se daba el caso de reivindicación en frente del que dejó de poseer y que regulan los artículos 954, 955 y 957 del C. - Civil.

Este último soporte de la decisión no fue impugnado, - lo cual entraña otra grave deficiencia técnica en la formulación del recurso, pues cuando la sentencia del Tribunal viene fundada en varias razones, la falta de ataque a uno de los pilares en que descansa determina el insuceso del recurso. A este propósito ha dicho la jurisprudencia que "aunque el recurrente aguya la sentencia por violación de varias disposiciones civiles, la Corte notiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación, si la sentencia trae como base una apreciación que no ha sido atacada en casación" (CXXXII, 23).

5.- No obstante la ineptitud o falles técnicas del recurso, no aparecen en la litis elementos de prueba que incuestionablemente señalen al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como poseedor del predio materia de la reivindicación, pues todo indica que otras personas son las que tienen esa calidad jurídica, como lo pone de relieve la prueba de inspección judicial, pericial y documental.

Por tanto, se rechaza el cargo.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República

Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de octubre
1976, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -
este proceso ordinario.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte
recurrente.

Cópiase, notifíquese y devuélvase el proceso al Tribu-
nal de origen.

ALBERTO OSPINA BOTERO

JOSE MARIA ESQUERRA SAMPER

GERMAN GIRALDO ZULUAGA

HECTOR GOMEZ URIBE

HUMBERTO MURCIA BALLEW

RICARDO URIBE-HOLGUIN

HORACIO BAITAN TOVAR

Secreterio